

C. jefe político de la misma ciudad, por la cual, á consecuencia de no haberse presentado á recibir la presidencia municipal de la Villa de Cós que lo eligió para este encargo, fué aprehendido y entregado á una escolta de seguridad pública, á fin de que lo condujera á disposicion del C. jefe político del Fresnillo que lo habia solicitado; alegando el quejoso, que con ese procedimiento contra su persona se han violado en ella las garantías que otorgan los artículos 16 y 18 de la Constitucion federal. Visto el informe del C. jefe político de Zacatecas y el que produjo el C. jefe político del Fresnillo, en los que aparece, que la aprehension y conduccion del C. Delgadillo, fue por faltas de obediencia al segundo de dichos dos gefes que le habia prevenido en varias comunicaciones fuese á desempeñar la presidencia referida y pagar una multa de 25 pesos por su resistencia. Vistas las pruebas rendidas por el quejoso y su alegato de bien probado; los pedimentos y alegato del C. promotor, con todo lo demás que de autos consta y ver convino.

Considerando: que las providencias de los CC. gefes políticos de Zacatecas y el Fresnillo, contra la persona del quejoso, importan un procedimiento criminal de la exclusiva competencia de la autoridad judicial, y que en este concepto aquellos funcionarios, ejerciendo la autoridad administrativa, son incompetentes para dictar las providencias objeto de la queja; con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del juez de Distrito de Zacatecas pronunciada en 28 de Agosto último, declarándose: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Teófilo Delgadillo, contra las órdenes de los CC. gefes políticos de Zacatecas y el Fresnillo, por violarse con ellas las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitucion federal.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de

esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José Garcia Ramirez.—Luis Maria Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Setiembre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por el C. Francisco Ontiveros y Esnaurrizar, contra la administracion de rentas municipales de la misma ciudad, que le exigió el pago de los réditos del capital de catorce mil pesos en que el C. Manuel Yrizarri se adjudicó la casa núm. 10 del Puente del Correo Mayor, de cuyo pago se constituyó fiador el quejoso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El promotor dice: que el C. Francisco Ontiveros promovió ante el juzgado recurso de amparo, quejándose de que en su persona se violaron las garantías concedidas en los artículos 14 y 16 de la Constitucion, por la administracion de rentas, al hacer efectivo el pago de los réditos que adeudaba D. Manuel Yrizarri por un capital de catorce mil pesos que reconoció á favor del hospital de San Andrés, por pre-

cio de adjudicacion de la casa núm. 10 del Correo Mayor, y de quien fué fiador de réditos el expresado C. Ontiveros. El expediente demasiado voluminoso, contiene entre otras piezas original y en copia el que se siguió por el ayuntamiento para hacer efectivo el cobro de los réditos que adeudaba Irrizarri.

En 1862 fué redimido el capital de catorce mil pesos por D. Justo Carresse, y cedido en debida forma por el supremo gobierno, no habiéndose comprendido en la cesion los réditos, conservó el hospital de San Andrés sus derechos para hacerlos efectivos como hoy lo ha practicado. Al hacer el cobro el ayuntamiento representante legítimo del crédito, se dirigió contra la casa responsable que hoy pertenece á la Sra. D^a Laura Ilibarri, quien se defendió excepcionándose del pago de los réditos que se lo reclamaban, manifestando, que habia comprado la finca libre de gravámen, y que los deudores de los réditos lo serian D. Manuel Irrizarri ó su fiador el C. Francisco Ontiveros, como lo acreditaba en la escritura de la adjudicacion otorgada á Irrizarri en la cual así constaba: La administracion de rentas en vista de esta escritura, ordenó al recaudador suspendiese las gestiones con la Sra. Ilibarri ó hiciese el cobro al C. Ontiveros como fiador de Irrizarri. El C. Ontiveros hizo el pago de los réditos, recargos y gastos, segun expresa la diligencia respectiva, y con posterioridad se presentó al ayuntamiento diciendo, que el pago fué su intencion que se tuviera como depósito, aunque lo contrario pareciera en la diligencia, pues en ese acto no supo lo que autorizaba y solo quiso evitar las consecuencias que como comerciante y hombre honrado podría sufrir teniendo lugar un embargo.

Los artículos constitucionales citados por el C. Ontiveros, no son aplicables en manera alguna al caso presente; el primero, porque no existe ni la ley retroactiva ni la sentencia judicial, y el segundo porque no

se trata del cateo ni de la invasion de la autoridad en su persona, familia, domicilio, papeles, y posesiones, sino de un cobro que hace la administracion de rentas municipales, quien goza de la facultad económico-coactiva, como lo ha demostrado el C. abogado defensor de la beneficencia en el pedimento que obra á fojas 22 del cuaderno de prueba y se ocupa de ese punto en la 35 vuelta, y 38 del mismo cuaderno.

Desatendiéndose de si la excusa alegada por el C. Ontiveros de que firmó la diligencia en que hizo el pago con la intencion que ha alegado, y que si suscribió lo contrario fué sin saber lo que hacia, y si acaso este error de derecho pudiera alegarlo, que quizá no cabria legalmente, su principal argumento para no considerarse deudor de los réditos lo toma de la novacion de contrato que supone ha existido, por haber pasado el capital de catorce mil pesos, y la finca en que se reconocia á diversas personas sin su intervencion. Contra estas sí cabria la excepcion, pero siendo un hecho que se adeudaban los réditos, su excepcion solo seria legal si se lo cobraran estando prescritos, ó por parte no legítima; no es lo primero, porque el mismo C. Orvañanos conviene, en que es cierto el crédito en el adeudo primitivo, ni tiene ninguna de las circunstancias que se exigen en la prescripcion; no es lo segundo, porque el ayuntamiento es legítimo representante de lo que corresponda por cualquier título á la beneficencia.

Las pruebas rendidas por el C. Ontiveros, que consisten en la copia del expediente seguido ante el ayuntamiento, y las declaraciones de los CC. Francisco Arrieta y Silviano Martínez, no miran á las garantías constitucionales que se dicen violadas, sino al mayor ó menor derecho que la administracion de rentas tuvo para hacer el cobro de los réditos con los recargos y gastos, lo que no puede ser materia de revision del presente juicio de amparo, que está concretado al examen de si hubo ó no viola-

cion de garantías de los artículos constitucionales reclamados.

Por lo expuesto y en vista de las constancias á que se ha referido, pido al juzgado declare que no ha lugar al amparo.

México, Agosto treinta de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Herrera Campos.*

Sentencia del Juez Distrito.

Juzgado 1º de distrito de México.—México y Setiembre dos de mil ochocientos setenta y uno.—Visto este juicio de amparo seguido ante este juzgado primero de Distrito, á solicitud del C. Francisco Ontiveros y Esnaurrizar; vistas las diligencias practicadas; las pruebas rendidas y los alegatos producidos; y visto lo pedido por el C. promotor con lo demás que se ha tenido presente y de todo lo cual resulta: que el quejoso asegura que se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 del código fundamental de la República, por la junta de hacienda y administracion de rentas municipales del ayuntamiento de esta capital, al hacer efectivo el pago de los réditos que se le reclamaron como fiador de D. Manuel Irizarri, por un capital que reconocia en la casa número 10 de la calle del Puente del Corro Mayor, á favor del hospital de san Andres; que en 1862, fué redimido el capital por D. Justo Carresse y cedido en debida forma por el gobierno sin comprender en la cesion los réditos, por lo que el hospital de san Andres conservó sus derechos para ejercitarlos y hacerlos efectivos; que el ayuntamiento como legítimo representante del hospital, se dirigió contra la casa responsable, y la Sra. Dª Laura Iribarren, dueña de ella, se excepcionó para no pagar los réditos con que habia comprado la finca libre de todo gravámen, y por lo mismo los debia de pagar D. Manuel Irizarri, que se adjudicó la casa en virtud de la ley

de 25 de Junio de 56, ó su fiador D. Francisco Ontiveros, segun la escritura de adjudicacion de fecha 9 de Octubre del mismo año; que reconvenido Ontiveros y requerido de pago por los réditos como fiador, exhibió parte, haciendo paga real y parte en clase de depósito, hasta que la junta de hacienda del ayuntamiento declarase si la debia pagar, cuya diligencia se practicó el dia 17 de Noviembre de 1870: que despues, con fecha 18 de Diciembre del mismo año, pidió á la comision de hacienda se le devolviese la cantidad que habia satisfecho, cuya peticion reprodujo con fecha 16 de Abril de este año: habiéndose proveido que se estuviera á lo acordado en 23 de Febrero, cuyo acuerdo es el siguiente: "No ha lugar á la devolucion que se solicita y dándose por concluido este expediente, archívese." Que en este estado el negocio, el quejoso resolvió entablar el recurso de amparo, invocando los artículos 14 y 16 citados, por lo que se debe examinar si han sido violadas las garantías que ellos otorgan; que la junta de hacienda del ayuntamiento al cobrar los réditos de la manera que lo hizo por medio de su administrador, obró dentro del círculo de sus facultades, es innegable segun el tenor de las leyes de 20 de Noviembre de 1838, 17 de Setiembre de 1842 y 6 de Octubre de 1848. Que atendiendo al sentido del art. 16 y teniendo á la vista el expediente formado por la comision de hacienda, como esta no ha expedido ninguna ley retroactiva, ni ha procedido en sus determinaciones dando sentencia por leyes posteriores al hecho, y ni se ha declarado tribunal, es claro que no ha infringido las garantías que él otorga. Que no envolviendo el cobro que hizo la administracion de rentas municipales, en virtud de sus facultades económico-coactivas, catco, invasion de la autoridad en su persona, familia, domicilio, papeles y posesion, tambien es claro que no se han infringido las garantías que otorga el art. 16. Que si el C. Ontiveros al ser requerido de pago enteró el importe de los

réditos, haciendo paga real con una parte y con la otra como dejándola en depósito mientras la junta de hacienda declaraba si había de pagar, cuya declaracion le fué contraria, no hay duda que se sujetó á su decision, y si firmó la diligencia con intencion distinta sin saber lo que hacia, esta intencion ó ignorancia no le pueden servir para pedir amparo, supuesto que el mismo atacó sus intereses; que si el capital de los catorce mil pesos y la finca han pasado á distintas personas sin su intervencion, produciendo una novacion y quedando viva su fianza, puede ejercitar su accion como mejor le parezca, pero no recurrir al amparo, porque con estos hechos no se han violado sus garantías individuales. Y que por sus pruebas rendidas, solo ha justificado el mayor ó menor derecho que al ayuntamiento, como legítimo representante de la beneficencia, tuvo para hacer el cobro de los réditos; con arreglo á lo expuesto, á los artículos 101 y 102 de la Constitucion general de la República, y á la ley de 20 de Enero de 1869, fallo: que la justicia federal de los Estados-Unidos mexicanos no ampara al C. Francisco Ontiveros y Esnaurrizar, en contra de lo determinado por la junta de hacienda del ayuntamiento de esta capital, y practicado por su administrador de rentas, para conseguir el pago de los réditos que adeudaba D. Manuel Irizarri, de quien fué fiador del capital de catorce mil pesos que se reconocian á favor del hospital de S. Andres en la casa núm. 10 del Puente del Correo Mayor y que le fué adjudicada á dicho Irizarri, imponiéndosele á Ontiveros el minimum de la multa que asigna la ley citada.

Hágase saber, sáquense copias de esta sentencia para que se publiquen en el *Diario Oficial y Semanario Judicial*, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia,

Así lo mandó y firmó el C. juez 1º de Distrito, Lic. José Isaac Sancha. Doy fé.

—J. I. Sancha.—Joaquín Sanchez Gonzalez.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre quince de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado 1º de Distrito de esta ciudad por el C. Francisco Ontiveros y Esnaurrizar contra la administracion de rentas municipales de la misma que le exigió el pago de los réditos del capital de catorce mil pesos, en que el C. Manuel Irizarri se adjudicó la casa núm. 10 del Puente del Correo Mayor, de cuyo pago se constituyó fiador el quejoso.

Considerando: que la administracion de rentas municipales obró dentro de la órbita de sus facultades al usar de la facultad económico coactiva para hacer efectivo el pago de los réditos: Que Ontiveros al ser requerido de pago, enteró el importe de los réditos, para que con una parte de el se hiciese paga real y para que la otra quedase en depósito entre tanto se declaraba por la junta de hacienda del ayuntamiento, si el requerido estaba ó no obligado al pago total; y con esto se sujetó á lo que se resolviese: que dada la resolucion en sentido afirmativo, se procedió al requerimiento con arreglo á la ley, lo cual demuestra que no se violó ninguna garantía individual en la persona de Ontiveros; y que si en su concepto hubo novacion de contrato ú otro motivo que lo pueda eximir del pago por haber pasado la finca al dominio de otras personas y chanceládose la fianza, puede usar de las acciones que mejor le parezcan y le concedan las leyes, mas no del recurso de amparo que solo tiene lugar cuando hay violacion de alguna garantía individual; se decreta:

Que se confirma el auto de 2 del presente mes y año, pronunciado por el juez

1º de Distrito de esta ciudad, en la parte que declara que la justicia federal de los Estados Unidos Mexicanos no ampara al C. Francisco Ontiveros y Esnaurrizar en contra de lo determinado por la junta de hacienda del ayuntamiento de esta ciudad y practicado por su administrador de rentas, para conseguir el pago de los réditos que adeudaba D. Manuel Irizarri, de quien fué fiador del capital de catorce mil pesos que se reconocían á favor del Hospital de San Andres en la casa núm. 10 del Puente del Correo Mayor.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado primero de Distrito de esta ciudad con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre veinte de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Guadalajara por el C. Eraclio García Diego, en representación del párroco de Mexicaltzingo, D. Trinidad Ochoa, contra la gefatura Superior de hacienda de esa capital, que pretende lanzar ejecutivamente á dicho cura párroco de la casa y huerta que ocupa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Señor juez primer suplente de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

El Ser. Lic. D. Eraclio García Diego, apoderado jurídico del Señor cura Coadjutor de la parroquia de Mexicaltzingo, en ocurno de 21 del mes próximo pasado expone que:

El C. coronel Felipe Maximin denunció ante esta gefatura superior de hacienda la casa que habita su poderdante, pretendiendo adquirirla en propiedad:

Que dicha finca le fué vendida y ha procurado ponerse en posesion de ella por la gefatura superior de hacienda, haciendo uso de sus facultades económico coactivas.

Entiende el Sr. García Diego que con esos actos se le han vulnerado á su poderdante las garantías individuales que tiene aseguradas por los artículos 16 y 27 de la Constitución federal, supuesto que la finca enagenada está exceptuada de la desamortización por las leyes de la materia, y por que siendo un punto verdaderamente contencioso resolver si tal finca pertenece á la naci6n ó á su poderdante, á los tribunales corresponde esa resoluci6n y no á la gefatura superior de hacienda. Fundado en esto, y con apoyo de la fracci6n 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869 pido amparo y protecci6n contra el acto de la gefatura superior de hacienda, por el cual se ha determinado que el Sr. D. Trinidad Ochoa desocupe la casa que habita para entregarsela al C. Coronel Felipe Maximin, á quien se la ha vendido la propia gefatura superior de hacienda.

Añade el Sr. García Diego, que el gobierno de este Estado y la gefatura política de esta ciudad se abstuvieron de cooperar al acto que, como atentado califican de la gefatura superior de hacienda, y que no prestaron el auxilio armado que se les pidió, sino cuando intervino en ese sentido la mediaci6n del C. general en jefe de la 1ª divisi6n, haciéndole entender al gobierno del Estado que se trataba de ejercer las facultades coactivas en un acto comun y